



## **SALA LABORAL**

Medellín, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidos (2022)

**Radicado: 05360-31-05-001-2019-00076-01**

### **AUTO**

Dentro del presente proceso ordinario laboral, se **AVOCA** conocimiento, y se **ADMITE** el recurso de **APELACIÓN** presentado por las partes demandante y demandada, contra la sentencia de primera instancia.

Una vez quede ejecutoriado el auto anterior, y de conformidad con el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 1223 de 2022, se les concede a las partes un término común de cinco (5) días para que presenten alegatos de conclusión, el cual correrá entre el **31 de agosto y el 06 de septiembre de 2022**.

Las alegaciones deberán dirigirse al correo electrónico: [des00sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:des00sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Surtido el traslado correspondiente, la sentencia, será proferida por escrito y notificada por **EDICTO**.

Ahora, previo a decidir el recurso de apelación contra la sentencia, se hace necesario resolver la solicitud que presenta el apoderado de la parte demandante, en la que aporta lo referente a una demanda arbitral presentada por INVERSIONES TRIBILIN S.A.S. en contra de ALBERTO ALEXANDER SIERRA MAYA, solicitando además, que de dicho proceso arbitral sea trasladada a este proceso ordinario laboral, una prueba testimonial, con el fin que dichas pruebas hagan parte del expediente procesal.

Para resolver sobre la incorporación de nuevas piezas procesales al expediente, debe recordarse, que en el régimen procesal laboral, está prevista la oficiosidad probatoria, como una facultad que tiene el juzgador para decretar las pruebas que considere que son absolutamente necesarias, en la búsqueda de la verdad real, por encima de la formal, según las voces del Art. 54 del C. P. Laboral y de la S. S.

En ilación con lo anterior, se considera que en este caso la solicitud elevada por la parte actora para que se incorporen al expediente nuevas piezas procesales referentes a la demanda arbitral que presentó el demandado de este proceso en su contra, no es procedente en la medida que la práctica de pruebas en segunda instancia a la luz del artículo 327 del Código de General del Proceso, solo procede:

- Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo.
- Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
- Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.
- Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.
- Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior.

Así las cosas, las nuevas pruebas documentales y testimoniales que pretende incorporar el apoderado de la parte accionante al proceso en esta instancia, no solo no fueron enunciadas en la demanda, sino que tampoco fueron decretadas por solicitud de parte, ni se trata de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria, ni se encuentra ninguna razón para decretar de manera oficiosa, pues se trata de documentos que dan cuenta de una demanda arbitral que deviene de una “compraventa y arrendamiento de maquinaria usada”, que no podrían ser determinantes en la decisión que se debe proferir en esta instancia referente a la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre las partes de la que devienen diversas condenas por prestaciones legales, así como indemnizaciones; es decir, que tanto la prueba documental como la testimonial que pretende ser trasladada del proceso arbitral al proceso ordinario laboral que cursa en esta instancia, fue rendida dentro de otro proceso totalmente distinto que nada tiene que ver con el litigio que se define, máxime si se tiene en cuenta que aceptar la incorporación de dichas pruebas en esta etapa procesal, después de ser proferida la sentencia de primera instancia, rompería el equilibrio procesal, como garantía fundamental del debido proceso y derecho de contradicción con que cuentan las partes.

Por las razones anteriormente expuestas, se niega la solicitud elevada por la parte accionante referente a la incorporación de pruebas en esta instancia.

Ahora, frente a la solicitud elevada por el apoderado de la parte accionada referente a que se ordene el “embargo de los derechos litigiosos o créditos, que tenga el demandante o que puedan resultarle a su favor para garantizar el pago de las costas y agencias en derecho decretadas en el laudo arbitral”, basta decir que tal solicitud es a todas luces impertinente, puesto que dicha figura es propia de los procesos ejecutivos, lo que implica que dicha solicitud no pueda ser definida en este proceso ordinario laboral.

Aunado a lo anterior, en el proceso laboral, solo la medida cautelar en esa clase de procesos (artículo 37A de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 85A del CPT), la medida cautelar solo procede en especiales circunstancias, como por ejemplo, en los eventos donde el juez advierta los siguientes comportamientos del demandado: (i) cuando efectúe actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, (ii) o cuando se encuentre en “graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”, de manera que al no ajustarse a ninguna de los anteriores supuestos, se rechaza de plano dicha solicitud.

Lo resuelto se ordena notificar por ESTADOS.

Se firma por los integrantes de la Sala, los magistrados

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° **150** del **25 DE AGOSTO DE 2022**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>